

Surinam: ¿revolución o dictadura militar?

Andrés Serbín

Surinam, pese a haber permanecido hasta 1975 como colonia holandesa, presenta la clásica herencia colonial: una composición multiétnica originada en la importación de mano de obra esclava y asalariada que nutre las tensiones políticas entre dos bloques etnopolíticos enfrentados; un sistema político calcado de la metrópoli y una economía afincada en la explotación de la bauxita y altamente dependiente de la ayuda externa. Al producirse la independencia de Surinam, los dos bloques políticos enfrentados - en el poder el National Party Combination (NPK), aglutinado alrededor del grupo africano y en la oposición el Partido Democrático Unido (VDP), hegemonizado por los hindúes mantuvieron dada la paridad de fuerzas basadas en la alianza con otros grupos étnicos, un estancamiento de la vida política del país. A esta situación se asocia, por otra parte, la creciente corrupción administrativa, en el marco de la presencia decisoria de las empresas que controlan la explotación de la bauxita - Alcoa y Billiton - y la fuerte dependencia económica de la vida holandesa.

La revolución de los sargentos

Cinco años después de la independencia, el 25 de febrero de 1980, las reivindicaciones gremiales de los suboficiales de las fuerzas armadas del joven país derivan en un golpe militar que derroca al gobierno constitucional e instaura un régimen cívico-militar. La ausencia de planteamientos políticos e ideológicos claros entre los sargentos protagonistas del golpe, los obliga a recurrir a los partidos y organizaciones de izquierda - de limitada influencia en la vida política de Surinam y originados en su mayoría en movimientos de estudiantes surinameses en Holanda - en busca de asesoramiento y cuadros civiles. En este marco, los propósitos iniciales de la "revolución de los sargentos" de eliminar la corrupción administrativa y de restablecer el orden en la administración pública, de luchar contra el desempleo y, fundamentalmente, de diluir en la escena política los antagonismos étnicos que la permeaban, chocan con grandes dificultades en la medida que no se termina de definir un programa de acción con objetivos claros y que no se logra desarrollar un respaldo popular al proceso. Las indefiniciones y contradicciones internas y las tensiones y conflictos entre el sector moderado y el sector radical de los militares, y entre éstos y los civiles que los acompañan, contribuyen a que en el transcurso de los tres años siguientes se produzca una sucesión de crisis gubernamentales, algunas de ellas asociadas a intentos de contragolpe.

En este contexto, el gobierno revolucionario no logra impulsar un programa de cambios efectivos: la explotación de la bauxita continúa en manos de las compañías transnacionales, la agricultura se deteriora progresivamente, los programas sociales se quedan a medio camino y el Frente Revolucionario que debería aglutinar a las organizaciones de base creadas en sustitución de los partidos políticos, no logra concitar un apoyo y una participación popular que permita la transición a nuevas formas de organización política. Por otra parte, en el mismo período, algunos de los grupos y partidos de izquierda que inicialmente apoyaron a la "revolución de los sargentos" comienzan a distanciarse del proceso hasta asumir finalmente una activa oposición al gobierno cívico-militar. Para finales del año 1982, entre estas organizaciones se destacan el Volks Partiej (Partido del Pueblo), el Palu - vinculado a sectores campesinos - y el sindicato de izquierda C-47^{*}, que desarrollan una actitud cada vez más crítica. Junto a esta evolución interna, se acrecientan las presiones externas. Holanda amenaza permanentemente con el retiro de su ayuda económica si el procedimiento se radicaliza demasiado, y EE.UU. comienza a ejercer consecuentes presiones en el mismo sentido.

En marzo de 1982, un grupo de militares intenta un contragolpe que se enmarca en la sucesión de crisis por las que atraviesa el gobierno cívico-militar. Este movimiento cuenta, aparentemente, con el apoyo de un sector de empresarios vinculado a la comunidad hindú. El golpe es reprimido y uno de sus principales cabecillas es fusilado. Posteriormente, el gobierno revolucionario denuncia la creación de una fuerza de mercenarios financiada por exiliados surinameses en Holanda, aparentemente vinculados a la creciente oposición interna.

En este contexto, se incrementa el acercamiento a Cuba, Granada y Nicaragua, a la vez que se intenta aceitar las relaciones con Holanda y se desarrollan contactos con Venezuela. El comandante Bouterse - que emerge progresivamente como "hombre fuerte" del proceso y que controla el Consejo Nacional Militar, principal organismo del gobierno cívico-militar - visita Granada, y posteriormente Venezuela.

Un proceso sin apoyo popular

Sin embargo, la situación interna comienza a agudizarse en los primeros días de noviembre de 1982, cuando el sindicato Moderbond^{**} - uno de los más importantes del país - inicia una huelga general, concitando un amplio apoyo de los sectores de la oposición y de una gran parte de la población. Entre otras exigencias, se reclama el retorno al orden constitucional y la convocatoria a elecciones. Estas exigencias son inicialmente aceptadas por el negociador

^{*} Sindicato de la industria de la bauxita, uno de los más fuertes del país.

^{**} Sindicato afiliado a la ORIT-CIOSL.

delegado por el Consejo Militar Nacional - el comandante Roy Horb, considerado como uno de los militares moderados -. Pero inmediatamente después de la finalización de la huelga, Bouterse denuncia la mala fe de algunos de los mediadores en la negociación - entre ellos André Haakmat, ministro del gobierno derrocado en febrero de 1980 - y el gobierno cívico-militar se retracta de los acuerdos establecidos. Simultáneamente se acrecienta el control sobre la oposición y se impone la censura de prensa, mientras que se denuncia formalmente la participación de miembros de la embajada de EE.UU. en la organización de la huelga general. La situación se agrava, al producirse, en las semanas siguientes, una amplia movilización de los estudiantes universitarios en protesta por la "izquierdización" de la Universidad, y al constituirse una "Asociación para la democracia" impulsada por un grupo de empresarios y de políticos que abogan por la restitución de los derechos políticos, la suspensión de la censura y el control de la prensa y el retorno al estado de derecho.

En este marco, el 9 de diciembre, el gobierno de los "sargentos" devela la gestación de un nuevo golpe de Estado, encarcelando a numerosos dirigentes de la oposición acusados de participar en el mismo. En los días siguientes, las agencias de prensa anuncian el fusilamiento de 12 de estos dirigentes, incluyendo a Cyril Daal, líder del Moderbond, y al teniente Rombocus, uno de los dirigentes del golpe de marzo condenado a 12 años de prisión.

Como consecuencia de estos hechos, Holanda y EE.UU. retiran totalmente su ayuda financiera a Surinam, mientras que Bouterse denuncia nuevamente la participación de estos países en el golpe abortado. Simultáneamente se produce una nueva reestructuración del gobierno cívico-militar, al renunciar algunos de los miembros, incluyendo al comandante Roy Horb.

En líneas generales, el cuadro se asocia con un proceso de desestabilización similar al sufrido por Guyana en la década del sesenta, encauzado a través de las presiones económicas y de la manipulación de la oposición, de los sindicatos y de los antagonismos étnicos. Sin embargo, en el caso de Surinam, se articula a las contradicciones internas de los militares revolucionarios, manifiestamente huérfanos de una ideología y de un programa claro, como así también de un apoyo popular. A este escenario cabe agregar que, pese a los esfuerzos de diluir los antagonismos étnicos que tradicionalmente permean la política surinamesa, éstos tienden a recrudecer. Los interrogantes que surgen frente a la "revolución de los sargentos" lleva a preguntar hasta qué punto la creciente intervención externa agudizará el enfrentamiento violento entre los militares revolucionarios y la oposición, mediatizado por el fantasma de una exacerbación del conflicto interétnico en el marco de un proceso revolucionario sin apoyo popular.